

Antonio Vicente Mosquete, el presidente del cambio

El final prematuro de una transición inacabada en la ONCE

Este mes de junio se han cumplido 30 años de un acontecimiento, repentino y aparentemente inesperado, que cambiaría para siempre la transición política y económica de la ONCE, una de las organizaciones de ciegos más importantes del mundo. Se trata de la muerte de Antonio Vicente Mosquete, el primer presidente democrático de esta institución. Una muerte prematura –con apenas 35 años– y cargada de preguntas que interrumpió la transición democrática y social de los ciegos españoles y llevó a la organización por una senda más propia de una empresa comercial que de una institución de servicios. El nombre de este político, Vicente Mosquete, fue eliminado del Colegio de ciegos de Madrid que lo llevaba, en un intento, más o menos consciente, de borrar de la memoria histórica la ONCE que pudo ser. Ahora el Ayuntamiento de Madrid recupera esa memoria poniendo su nombre a un pequeño parque cercano a ese centro.¹ En este artículo se reconstruye el cambio de ciclo que supuso su muerte. Un cambio por partida doble –cambio en mitad de un proceso de cambio– que ilustra en parte las tensiones internas que vivió toda la sociedad española en aquellos años.

Antonio Vicente Mosquete murió a consecuencia de un accidente de ascensor en su domicilio el 3 de junio de 1987. En esos días el primer presidente elegido democráticamente estaba culminando un proceso de cambio en la ONCE que había comenzado cinco años antes, con su llegada a la Presidencia del Consejo General –el órgano de gobierno de esta institución– el 26 de abril de 1982. Junto con él había accedido al poder institucional una nueva generación de personas ciegas que habían nacido en una ONCE paternalista, propia de las instituciones de caridad del franquismo, pero que tenían

Ricardo Gayol es abogado y exdirectivo de la ONCE

Antonio Vicente es periodista e hijo de Antonio Vicente Mosquete

¹ El Ayuntamiento de Madrid, por acuerdo del Pleno de la Junta Municipal de Chamartín de fecha 14 de marzo pasado, aprueba que los jardines situados en el Paseo de la Habana 71 lleven el nombre de Antonio Vicente Mosquete.

también el bagaje cultural de los jóvenes de la transición española. Su experiencia en las incipientes asociaciones y su comprensión del momento histórico que vivía el país les llevó a la creencia de que la ONCE debía ser una entidad democrática, independiente y de servicios. Aspectos que debían quedar fijados y garantizados no solo legislativamente, sino también a través de un sistema de ingresos estable. Esa transición se inició con cierto retraso respecto al proceso político del país, lo cual no impidió que el cambio fuera exitoso y, visto en perspectiva, realmente impactante en general. La entrada de Mosquete en la presidencia marcó un cambio profundo en distintos ámbitos, mejorando drásticamente la calidad de vida de los ciegos, su nivel de integración social y disparando las expectativas sobre lo que la ONCE y los ciegos podían llegar a hacer. Este cambio de ciclo puede explicarse a través de cuatro ámbitos en los que el mandato de Mosquete desarrolló su actividad transformadora.

En primer lugar, el ejercicio de una democracia interna que rompiera el viejo modelo institucional monolítico y piramidal, fruto de su origen franquista. Esto había empezado a plasmarse en el primer proceso electoral de enero de 1982, que conformó una representación plural en el Consejo General como órgano de gobierno estatal y en los consejos territoriales implantados en las 31 demarcaciones electorales.²

En segundo lugar, la reforma del *Cupón pro ciegos*. El juego que la ONCE explotaba por concesión del Estado era la única fuente de recursos económicos de la institución y determinaba la capacidad para cumplir su función social. Desde su creación en los años treinta apenas había sido modificado y era más bien una rifa local de premios bajos. Comercialmente había quedado obsoleto por lo que se decide llevar a cabo una reforma radical. La reforma de enero de 1984, supone el lanzamiento del nuevo producto único a nivel estatal. El nuevo cupón supone un éxito comercial sin precedentes en el mundo del juego en España y marcará un cambio drástico en la economía y capacidad de acción de la ONCE.

En tercer lugar, la puesta en marcha de una red de servicios sociales. El objetivo principal del resto de reformas tiene que ver con una concepción de la ONCE como un instrumento al servicio de los ciegos. No en vano la institución asume parte de las responsabilidades estatales complementando los servicios públicos generales con servicios especializados para sus afiliados. Servicios que en estos años se ampliarán de manera sustancial. Además los afiliados pasan a tener cobertura básica en todo el Estado, con centros específicos zonales o estatales para ofrecer los programas educativos, de rehabilitación, de formación profesional y apoyo al empleo, tecnológicos y culturales. Estos servicios y ayudas impulsarán radicalmente la autonomía personal y la integración social de las personas ciegas en el

² Muestra del retraso organizativo de la ONCE es que aún no tenía una estructura adaptada al Estado de las Autonomías.

nuevo contexto social del país y en cooperación con las administraciones públicas, que también en aquel momento configuraban un incipiente modelo de Estado del bienestar.

El 7 de abril de 1982 se aprobaba la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI) como ejemplo de una nueva filosofía del Estado en materia de discapacidad. Esto abre un nuevo tiempo en las políticas sociales, que aunque fueron limitadas en su aplicación, gozaban de criterios coherentes para defender la normalización como método y la integración como objetivo en las políticas públicas. La ONCE se incorpora a esa dinámica y empieza a dar pasos en esa nueva línea, y así el 3 de julio de 1983 firma un acuerdo interinstitucional sobre la integración educativa del alumnado con discapacidad visual con el INSERSO y el Ministerio de Educación y Ciencia, luego ampliado a las comunidades autónomas con competencias educativas, lo que se traduce en una colaboración estrecha con Euskadi y Cataluña que abanderaban el compromiso público con la educación de los niños ciegos y que encontraban en la nueva ONCE un interlocutor abierto, eficaz y corresponsable.

La entrada de Mosquete en la presidencia marcó un cambio profundo disparando las expectativas sobre lo que la ONCE y los ciegos podían llegar a hacer

En cuarto lugar, una modernización de las estructuras de la entidad. Se normaliza la situación laboral de su plantilla de personal con la firma del I Convenio colectivo de la ONCE que entra en vigor el 9 de junio de 1984, lo que implica la regularización de sus actividades laborales hasta entonces fuera de cualquier marco legal. Se aprueban sus estructuras organizativas, tanto en el ámbito central como en el territorial y especializado, creando tres grandes áreas básicas de funcionamiento: a) Planificación Económica y Cupón; b) Secretaría General y c) Servicio para Afiliados. Todo ello en base al I Plan de Actuación de la ONCE, adoptado en 1983.

Toda esta nueva línea política se desarrolló no sin dificultades durante la primera legislatura de Antonio Vicente Mosquete. En ella su presidencia dependía del apoyo de varios de los grupos políticos que habían surgido en los años anteriores a las primeras elecciones internas en la ONCE. En enero de 1985, estas cuatro líneas de actuación reciben un impulso notable al formarse un equipo progresista, gracias al pacto que se alcanza dentro del Consejo General por los tres grupos de izquierdas, encabezado por Antonio Vicente Mosquete. Éste había tenido que bregar, mediante un mero entendimiento institucional, con el grupo conservador que ocupaba la dirección ejecutiva de la ONCE hasta el momento en que se produce el cambio de dirección y al fin la iniciativa del presidente se ve secundada por el nuevo equipo de gestión. El proceso de informatización de todos los servicios y la

gestión de la publicidad (tanto comercial como institucional) y de los servicios, son también campos determinantes de los cambios estructurales abordados en ese momento político.

Una evolución preocupante

El 28 de abril de 1986 se celebran las segundas elecciones internas. En ellas el nuevo grupo Unidad Progresista (UP), presidido por Antonio Vicente Mosquete y creado al calor del Pacto Progresista en septiembre de 1985, consiguió la mayoría absoluta en el Consejo General. Aunque aún existe una importante presencia de la oposición que controla siete de los quince vocales del Consejo, esta nueva distribución favorece una gobernabilidad menos accidentada que en la legislatura anterior. Ese último año de la presidencia de Antonio Vicente Mosquete, no obstante, no será un camino de rosas. Y no lo fue no tanto por esa oposición interna en la ONCE como por las dificultades con el gobierno socialista y las tendencias que van apareciendo dentro del propio grupo UP.

Un factor determinante es el nombramiento como director general de la ONCE en junio de 1986 del abogado Miguel Durán Campos, procedente de la delegación territorial de Catalunya. Durán convivirá con Vicente Mosquete en el último año de su liderazgo en la alta dirección de la ONCE. Será el dirigente más mediático de la organización en toda su historia y para el gran público es la figura que caracteriza la ONCE moderna aún después de su dimisión como director general siete años después. Esa eclosión pública ha deformado muchas veces la realidad histórica, dándole un protagonismo en el cambio democrático que realmente él no tuvo, olvidando el papel decisivo de Antonio Vicente Mosquete. La relevancia de Miguel Durán en la historia de la ONCE es innegable pero en un sentido distinto al que se suele creer.

En el último año de vida de Antonio Vicente Mosquete empiezan a aparecer síntomas claros del nuevo rumbo de la entidad, aunque ninguno se plasmará del todo hasta después de su muerte.

Los pulsos con el gobierno socialista

El éxito comercial de la ONCE provocó un nuevo estado de opinión sobre la importancia de la organización en la sociedad española, y el gobierno del país no fue ajeno a ese cambio. Inicialmente a los socialistas les rechinaba ese modelo institucional de la ONCE y dudaban sobre su continuidad a largo plazo, hasta tuvieron tentaciones de cambiarlo por Real Decreto en julio de 1983. Un intento que se quedó en un borrador. El éxito económico de la nueva ONCE modificó esas pretensiones originales y finalmente el gobierno optó por inten-

tar controlar la organización. Lo hizo a través del órgano de tutela, el Consejo de Protectorado de la ONCE donde el entonces ministro de Trabajo y Seguridad Social, Joaquín Almunia, designa a dos consejeros generales afines al PSOE y busca la fórmula de incrementar su influencia por encima de la alta dirección de la ONCE.

Al mismo tiempo la personalidad política de Antonio Vicente Mosquete se ve con recelo desde el PSOE que lo ve excesivamente crítico y cercano a las posturas del PCE. De ahí que los afines al PSOE lleguen a sondear un acuerdo con el grupo conservador. Acuerdo que resulta fallido. Al final el grupo afín al PSOE, integrado por universitarios en su mayor parte, favorece el Pacto Progresista ya que con él acabará accediendo a los cuadros técnicos y teniendo mayor influencia que la que las urnas le dieran.

Las distintas estrategias del gobierno para controlar e influir en el rumbo de la ONCE democrática y la resistencia de la dirección de la entidad abrieron en aquellos años no pocos conflictos. Los más importantes fueron la aprobación del Real Decreto de diciembre de 1985 y las autorizaciones en materia de juego. El pulso entre el gobierno y la ONCE no solo no se resuelve en los siguientes meses sino que el 15 de junio de 1986, una semana antes de las segundas elecciones en que Felipe González consiguió mayoría absoluta, se convocó una manifestación nacional de todo el colectivo de la ONCE en Madrid. En el último momento se alcanza un acuerdo y se anula la convocatoria. La dirección y la oposición estaban unidas en esa causa, lo que no ha sido habitual en la trayectoria de la institución.

Otro problema que se planteó con el gobierno fue el caso Prodiecu, entidad que expendía un juego ilegal, el *Cupón del minusválido*, utilizando el sorteo de la ONCE como referencia. La desaparición de Prodiecu, en la que Miguel Durán tuvo una intervención decisiva, obligó a negociar con el gobierno salidas laborales para su personal y otras medidas como la creación de la Fundación ONCE y la puesta en marcha del *Cuponazo*, que por el momento aliviaron la relación con el gobierno, mientras se incorporaban unas siete mil personas con discapacidad no ciegas a la venta del *Cupón de la ONCE*, lo que modifica drásticamente la plantilla de vendedores.

En cuanto a la batalla con el gobierno se puede decir que se apaciguó. Primero por el éxito sin precedentes del *Cuponazo* que supuso la culminación de las reformas del cupón en su primera etapa y produjo un impacto publicitario descomunal (mediante el famoso eslogan de “la cola”) y un tiempo de paz con el gobierno socialista. Por muy poco tiempo Antonio Vicente Mosquete no pudo vivir este final, pero prácticamente todos los elementos se habían trabajado en el último año de su presidencia.

A la paz con el gobierno del PSOE contribuyó también el nombramiento de Manuel Chaves al frente del Ministerio en julio de 1986 y sobre todo la salida de Luis García de Blas

de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social que paliaron la tensión con el PSOE y abrieron un espacio de diálogo mucho más constructivo.

No obstante durante aquel pulso ya se pudieron ver signos de lo que vendría luego. Decimos que llegó la paz pero en la guerra hubo también damnificados. Por parte del gobierno fue el secretario de Estado de la Seguridad Social; por parte de la ONCE, resultó apartado de la alta dirección el hombre fuerte de los socialistas dentro de la organización, Rafael de Lorenzo. Sus coqueteos con el ministerio sin contar con el presidente ni con el resto de la dirección, acaban provocando su salida del cargo. De Lorenzo y su relación con el poder marcarán la evolución de la ONCE tras la muerte de Mosquete. Durante los siguientes años desde posiciones secundarias logra hacerse imprescindible especialmente en las relaciones con los distintos gobiernos, tanto del PSOE como del PP. Hoy Rafael de Lorenzo es el secretario general de la ONCE.

La mercantilización de la ONCE

El éxito comercial de la ONCE supondrá también que lo que fue una organización pensada para los ciegos tenga una dimensión cada vez más importante como empresa, como generador de beneficios y de un superávit susceptible de invertirse en otros mercados. Durante los años del cupón previos al *Cuponazo*, los años de Antonio Vicente Mosquete, el éxito comercial fue inusitado. Pero la previsión del éxito del *Cuponazo* ya permitió en vida de Mosquete que se manifestase la personalidad política del nuevo director general, Miguel Durán. La personalidad política de Miguel Durán era muy diferente de la de Antonio Vicente Mosquete. Aunque en su primer año tuvo que seguir, al menos formalmente, la línea del presidente siempre iba buscando espacios para introducir su nuevo criterio economicista que colocase a la ONCE en un nuevo escenario empresarial ajeno al entorno social y sectorial en el que se había movido.

La compra de acciones del *Diario de Barcelona* en julio de 1986 fue el primer paso para abrir ese ciclo, que tras la muerte de Antonio alcanzará niveles máximos de expansión y de riesgo económico. También las empresas del juego como CIRSA y Recreativos Franco fueron objeto de interés para alianzas estratégicas en ese campo tan complejo, pero que estaba dentro del sector económico en el que la ONCE comenzaba a ser un actor decisivo.

Es cierto que en vida de Mosquete apenas se hizo efectiva alguna operación, y las pocas que se iniciaron estuvieron dentro de los campos en los que trabajaba la ONCE y nunca fueron meramente especulativas. Pero ya se dejaba ver el deseo de Miguel Durán por ese cambio de estrategia. Si la ONCE era tentadora para el gobierno con el cupón, la ONCE del *Cuponazo* con Miguel Durán dispuesto a gestionar enormes sumas de dinero fue aún más

irresistible. Especialmente desde la corriente guerrista se arrastró a la ONCE a operaciones ruinosas. La más escandalosa, la compra y cierre del Diario *El Independiente* en 1991.

La relación con el sindicato afín

El II Convenio colectivo suscrito el 16 de julio de 1985 con el apoyo de todos los sindicatos presentes en la negociación fue un ejemplo de la relación fluida de la dirección de aquel momento con todas las opciones sindicales y logró además un excelente acuerdo para los trabajadores de la ONCE. Por aquel entonces la Unión de Trabajadores de la ONCE (UTO), el sindicato más afín al grupo gobernante, todavía mantenía principios progresistas y guardaba un grado de autonomía bastante amplio respecto a la dirección. Pero poco a poco las cosas fueron cambiando. UTO pierde la presidencia del Comité Intercentros y cada vez más recurre a la dirección para conseguir influir a través de la política y alcanzar así lo que no logra obtener por la vía sindical.

El Congreso Extraordinario de UP del 1 al 3 de mayo de 1987, un mes antes de la muerte de Mosquete, consagra esa tendencia al contar UTO con la mayoría dentro de la Ejecutiva de UP. Antonio no puede evitar esta deriva y sufre su primera decepción al firmarse el III Convenio colectivo, donde el sindicato impone condiciones que él no considera lógicas en una entidad social como la ONCE. Pero la incidencia del sindicato dentro de la política institucional le obliga a ceder, lo que le provoca el 7 de mayo de 1987 un deseo claro de dimitir, solo tres semanas antes de su accidente mortal.

Aparte de su desazón concreta por el incidente sindical, quizás empieza a vislumbrar que esa confusión de roles entre lo sindical y lo político iba a determinar el futuro de la institución, como luego ocurrió.

La nueva forma de gobernar

Visto con perspectiva, en los días anteriores a la muerte de Antonio Vicente Mosquete, las cosas iban bastante bien: los logros sociales y económicos eran tangibles, el éxito comercial resultaba evidente, la solución al caso Prodiecu se acercaba, la expansión de los servicios sociales se hacía real, la creación de empleo era continua y la modernización de la ONCE mantenía un ritmo imparable. Sin embargo, varios elementos llevaban a Mosquete a un escepticismo profundo.

Por una parte el ambiente entre los directivos era de euforia y tras una subida de sueldo importante se preparaba un informe (llamado Informe HAY) que los acabaría de disparar. La

oposición interna estaba arrinconada. Sus aportaciones eran poco o nada constructivas y en la práctica no ejercían su labor opositora. Mosquete sabía no obstante que esto no era solo responsabilidad de la oposición. Era el funcionamiento que se establecía cuando existía mayoría absoluta.

Otra de las preocupaciones de Mosquete antes de morir fue la falta de transparencia de su Dirección General, de Miguel Durán, que hizo que por primera vez desconfiara de su equipo y asumiera la posibilidad de ser utilizado, desconfianza que quedará reflejada en una conversación personal en la que dijo: “aquí me mienten”.

Cambios inmediatos tras la muerte de Antonio Vicente Mosquete

Muy poco después de su muerte todo cambiará en el seno de la entidad. En primer lugar el control político. Miguel Durán acaparará todo el poder de la ONCE, relegando la figura del siguiente presidente, José Antonio Reyes, que conscientemente fue elegido para un rol secundario. El proceso se acompaña de un paulatino reforzamiento del partido gobernante que desde entonces apenas conocerá la oposición política. En las elecciones de 1989 ni siquiera se presenta el grupo opositor conservador y UP obtiene los quince puestos del Consejo. Al control del Consejo se añade casi de modo natural la fusión entre el partido y el principal sindicato UTO. Buena muestra es que en 1987 el secretario general de UTO, Mario Loreto, se convierte en el nuevo presidente de UP. Su fuerza hegemónica es tan compacta que en seis años acabará con el propio Miguel Durán fuera de la dirección. En este proceso monolítico los partidarios de Mosquete críticos con esta deriva son marginados y pierden su influencia.

En este periodo se produce también otro proceso, el de mercantilización. Un camino mucho más conocido por el público, en el que la ONCE se convierte en un *holding* empresarial que se maneja en el mercado con independencia del campo de actuación de la organización y sus afiliados.

La ONCE 30 años después, ¿una oportunidad para el cambio?³

Aunque en los dos primeros apartados hemos relatado el cambio democrático de la ONCE y los síntomas de una quiebra de ese nuevo modelo implantado desde 1982, no hay espacio aquí para contar el proceso evolutivo que sigue la entidad durante los 30 años siguientes.

³ Este último apartado se ha elaborado a partir de un artículo de Ricardo Gayol publicado en el diario *El Comercio*.

Baste pensar que los cambios posteriores a la muerte de Mosquete se han cronificado y solidificado. Hoy la ONCE está presidida por Miguel Carballeda, heredero de Mario Loreto Sanz, y controlada por la praxis de Rafael de Lorenzo. Ambos continúan manteniendo un sistema de partido único, sindicato único y apenas oposición política. La institución sigue cerrada al exterior y a las voces disidentes.

Para la corriente crítica que aún existe, estamos ante un verdadero fraude social que alguien más pronto que tarde tendrá que corregir

Del mismo modo que continúan las tendencias internas, también se ha mantenido estos años la imagen de la ONCE social, protectora y solidaria que nos dan los medios de comunicación. Existen no obstante voces que señalan las incongruencias de este proyecto institucional. En los últimos meses uno de los principales elementos de tensión, que ha llevado a la calle protestas enérgicas de los trabajadores de la ONCE, es la externalización de la venta de sus productos de juego hacia una red paralela a su plantilla de personal con discapacidad. Estancos, gasolineras, quioscos de prensa, supermercados, oficinas de correos y hasta comisiones de festejos como las Fallas de Valencia compiten ahora con los vendedores de la ONCE. Una competencia desleal hacia su propia red de ventas que causa estragos en la rentabilidad y en la calidad de los puestos de trabajo de esas personas con discapacidad. Situación alimentada por la misma Dirección de la ONCE al sancionar o despedir a sus vendedores y hasta negar la venta a personas ciegas si se considera a priori que no van a ser rentables.

Para la corriente crítica que aún existe, estamos ante un verdadero fraude social que alguien más pronto que tarde tendrá que corregir. El primer responsable de abordarlo es el Gobierno de Rajoy que a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ejerce la tutela del Estado sobre la ONCE. La ministra Dolors Monserrat es la presidenta del Consejo de Protectorado de la entidad, desde la que goza de facultades técnicas y políticas suficientes para frenar ese desatino y esa grave desviación de los fines sociales de la institución. Pero hasta el presente no ha habido voluntad política mínima para afrontar ese reto y las cosas se deterioran día a día.

En los últimos tiempos, tanto representantes de Comisiones Obreras de la ONCE como de la asociación PUEDO, grupo crítico dentro de la ONCE, han contactado con los grupos parlamentarios para mostrar su grave inquietud por esta situación.

Pero si el control público es hoy por hoy una utopía de difícil consecución, hay otro elemento interno que también impide la activación de una respuesta consistente a esta deriva

antisocial: la falta de democracia interna en la ONCE. La celebración de elecciones sindicales hace pocos meses ha demostrado que el ejercicio de la libertad de opción sindical era una auténtica epopeya por la imparable actuación de la empresa a favor del sindicato oficialista UTO/UGT al que pertenece todo el equipo de directivos y responsables de la entidad. Si eso ocurre con unas elecciones tan protegidas legalmente como las sindicales, es fácil imaginar lo que acontece con las elecciones políticas internas para los consejos territoriales y al Consejo General de la ONCE. La situación no es nueva. Desde hace 20 años no existe pluralidad en el máximo órgano político de la institución. Solo un partido ocupa todos los sillones del Consejo General.

Por tanto, al no funcionar ni el control público ni el control democrático en la ONCE la Dirección actúa a su capricho y a menudo en función de intereses personales y grupales que eliminan cualquier atisbo de crítica interna o externa que les incomode en su hegemonía. Al monopolio político se suma la importante inyección publicitaria a los grandes medios de comunicación lo que dificulta extraordinariamente la denuncia o el mero análisis objetivo de esa coyuntura.

Dentro de año y medio correspondería la convocatoria de nuevas elecciones internas y se da la paradoja de que ya no existe ningún grupo alternativo que quiera concurrir a los comicios pues a nadie le gusta ir directamente al matadero. Las condiciones leoninas de la normativa electoral y sobre todo su aplicación bananera han terminado por disuadir a cualquier otra opción para concurrir electoralmente contra el grupo que gobierna. Se han hecho intentos ímprobos por modificar esa norma, incluidas iniciativas parlamentarias que han chocado con el muro de un bipartidismo que ha resultado el mejor aliado de los actuales dirigentes de la ONCE, entre otras razones por su papel de puerta giratoria para políticos en salida del poder.

Pero estamos en un nuevo escenario político. El arco parlamentario es hoy más abierto que antes y parece más factible que desde el ámbito político se empiece a exigir un cambio que recupere la ONCE social y democrática que tantos logros alcanzara en la etapa anterior.

Así pues la historia de la ONCE es al mismo tiempo una historia de cambios y de estabilidad. La llegada de Antonio Vicente Mosquete en plena transición impulsó una transformación profunda hacia una ONCE autónoma y de servicios. Transformación que tras su muerte fue reconducida y en cierto sentido desactivada. Durante 30 años se fueron instalando en la organización tendencias homogeneizadoras en lo político y mercantilistas en lo económico que contaron con el beneplácito de los distintos gobiernos. Ahora, la diversificación del panorama político abre a su vez un nuevo periodo que supone una inmensa posibilidad para un nuevo cambio que retome parte de aquel impulso primigenio.